



Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013343-064-2020-00183-00
Demandante	Seguros del Estado S.A. Compañía de Seguros.
Demandado	Nación- Ministerio de Salud y Protección Salud.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ADMITE DEMANDA

I.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a admitir la presente demanda, en razón a que se cumplen los presupuestos procesales de los artículos 159 a 167 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. -Antecedentes

El día 23 de noviembre de 2020, la **COMPAÑÍA DE SEGUROS; SEGUROS DEL ESTADO S.A.** a través de apoderado judicial, radicó demanda en contra de la Nación- **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, con la que pretende que se declare la nulidad de las resoluciones No. 1238 del 11 de abril de 2018, y N° 2248 del 30 de mayo de 2018, a través de las que de una parte, se declaró la ocurrencia del siniestro y se hace efectiva la garantía única de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de la obra N° 770 de 2014 y, de la otra, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por SEGUROS DEL ESTADO S.A. en contra de la Resolución N° 1238 del 11 de abril de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara a la demandada a la restitución de la suma de dinero que Seguros del Estado S.A., tuvo que pagar como consecuencia de lo resuelto por la Resolución 1238 de 2018, esto es, la suma de \$62.191.811.47.

Para resolver sobre la admisión de la demanda, el Despacho estudia lo siguiente:

III.- CONSIDERACIONES

3.1.- JURISDICCIÓN

Con la presente demanda, la parte actora está ejerciendo el medio de control de reparación directa, pretendiendo que la demandada sea declarada extracontractualmente responsable por los daños ocasionados a la víctima directa al retenerlo el 26 de julio de 2018, por tener una pistola y ser propietario de un vehículo blindado los cuales contaban con sus documentos en orden¹

3.2.- COMPETENCIA

Este Despacho de la Sección Tercera de la oralidad, tiene competencia para conocer en primera instancia la presente demanda de reparación directa, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y como quiera que el monto de la pretensión mayor por concepto de perjuicios materiales hasta la presentación de la demanda², no supera el límite de los 500 s.m.m.l.v. allí establecidos, por cuanto se cuantificaron en la suma de \$62.191.811,47 monto que no supera el tope legal. (fl. 13 archivo demanda CD)

Y en cuanto al factor territorial, el numeral 6° del CPACA establece que la competencia se determina por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.

3.3.- OPORTUNIDAD³

De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, frente a la demanda en ejercicio de la pretensión de controversias contractuales, establece las reglas que han de tenerse en cuenta para el efecto. Concretamente el término es de dos (2) años que se contarán: *“a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”*.

¹ Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. (...)

² Además, se solicitaron perjuicios de carácter inmaterial, que no determinan la competencia por el factor cuantía en el presente evento.

³ En cuanto a la caducidad de la acción, se ha determinado que, en los casos en que el origen de un proceso sea la declaratoria de un siniestro, es decir, cuando se hace dependiendo del régimen legal efectiva la garantía de estabilidad o única, aplicable, el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad es desde la ejecutoria del acto administrativo que lo declara, esto cuando se ataca la legalidad de esa decisión.

En tal sentido y para el caso concreto se tiene en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir el 30 de mayo de 2018⁴, luego, el término de caducidad se empezará a contar a partir del día siguiente, esto es, a partir del día 31 de mayo 2018.

Se tiene por tanto que el cómputo del término de caducidad inició el 31 de mayo de 2018, razón por la que el término de los dos (2) años venció el **31 de mayo de 2020**.

La demanda fue presentada el día **23 de noviembre de 2020** (fl. 5), luego, en principio, se debería indicar que la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, se encontraría caducado; sin embargo, se debe hacer la aclaración de que a raíz de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 564 de 2020, el cual en su artículo 1º suspendió los términos de caducidad y prescripción previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer los derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la rama judicial, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1º de julio de 2020, fecha en la que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso su reanudación.

Se concluye entonces que el término feneció el 16 de septiembre de 2020, no obstante, la parte demandante radicó el 9 de septiembre de 2020 solicitud de conciliación prejudicial, dando como resultado la suspensión de dicho término, la cual fracasó de conformidad con la constancia de fecha 19 de noviembre de 2020.

En virtud de lo anterior, el término de caducidad, se extendió hasta el **27 de noviembre de 2020**, por lo que se concluye que se radicó en tiempo la presente demanda.

Además, debe tenerse presente que se cumplió con el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, (Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009).⁵ El término para incoar la demanda se suspendió desde el momento en que se presentó la conciliación prejudicial hasta que se agotó la misma (9 de septiembre de 2020 al 19 de noviembre de 2020), como lo establece el artículo 21 de la Ley 640 de 2001⁶.

⁴ Hecho 3.6 escrito de demanda, Donde la demandada confirma la Resolución 1238 de 2018, donde se declaró el siniestro e hizo efectiva la garantía.

⁵ Adicionado por el art. 13, Ley 1285 de 2009, así: Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial."

⁶ "Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable".

3.4.- REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

La parte actora demostró el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA, al haber agotado el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial en derecho, allegando la constancia vista a folios 142 archivo de anexos emitida por la PROCURADURÍA 192 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA, que da cuenta que la parte demandante convocó a la demandada. Conciliación que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio.

3.5.- LEGITIMACIÓN

Por Activa: En el presente caso se advierte que la demandante **Seguros del Estado S.A. Compañía de seguros**, se encuentran legitimada en la causa por activa por cuanto actúa en calidad de afectada en virtud de la declaratoria del siniestro la cual hizo efectiva la garantía única contenida en la póliza de N° 65-44101113083 expedida por Seguros del Estado S.A.

Por pasiva: De conformidad con la situación fáctica en que se fundamentó el presente medio de control, se establece que la entidad aquí demandada, esto es, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió los actos administrativos, cuya nulidad se demanda en el presente caso, esto es, las resoluciones No. 1238 del 11 de abril de 2018, y N° 2248 del 30 de mayo de 2018, a través de las que de una parte, se declaró la ocurrencia del siniestro y se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de la obra N° 770 de 2014 y, de la otra, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por Seguros del Estado S.A., en contra de la Resolución N° 1238 del 11 de abril de 2018.

3.6.- REQUISITOS FORMALES

La demanda también cumple con los requisitos de los artículos 162 y 163 del C.P.A.C.A., relacionados con la designación de las partes y sus representantes; las pretensiones expresadas de manera clara y precisa; los hechos y omisiones en que se fundamentan; los fundamentos de derecho que las soportan; la solicitud de pruebas que se quieran hacer valer y; el lugar y dirección donde las partes recibirán las notificaciones personales.

Igualmente se acompañó copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Entonces, como revisado el contenido de la demanda y de sus anexos, se advierte que ésta reúne los requisitos para que la misma sea admitida, se procederá en tal sentido.

En consecuencia, el **JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

1.- **Se ADMITE** la presente demanda presentada en ejercicio del medio de control de controversias contractuales presentada por **Seguros del Estado S.A. Compañía de Seguros** contra la **Nación- Ministerio de Salud y Protección Social**.


2.- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE** al señor **Ministro de Salud y Protección Social**, o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. A la parte actora notifíquese por anotación en estado.

3.- **NOTIFÍQUESE** al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

4.- **CÓRRASE TRASLADO** de la demanda a la parte demandada por el término de **TREINTA (30) DÍAS** de conformidad con lo preceptuado en el artículo 172 del CPACA.

5.- Se reconoce personería al doctor Daniel Andrés Samacá Guerrero, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.454.919 y T.P. No. 298.347 del C.S de la Judicatura, como apoderada de la parte demandante en los términos de los poderes visibles en los anexos que obran en el CD.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MAGDA CRISTINA CASTANEDA PARRA
Juez